

C.A. Santiago.

Santiago, veintiuno de abril de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

1°.- Que, comparece la abogada Carolina Miranda Oyarzún, en representación de **Aguas del Valle S.A.**, quien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N°18.902, deduce reclamo de ilegalidad contra la decisión dictada por la **Superintendencia de Servicios Sanitarios**, contenida en el Oficio SISS N°2776, de 30 de agosto de 2024, refrendada por el Oficio SISS N°3333, de 23 de octubre de 2024, notificado el 26 de octubre de 2024, y que resolviera sobre la reposición interpuesta en contra del primer acto administrativo, que también se reclama, y que rechazó dicho recurso, manteniendo firme la instrucción dada a su representada.

Expone que mediante Oficio N°2776, de 30 de agosto de 2024, la Superintendencia mantiene firme la instrucción impartida a Aguas del Valle S.A. mediante Oficio N°1847, de 13 de junio de 2024, de: **a) Ejecutar una solución de infraestructura definitiva para el sector Barrio Industrial que independice las descargas de RILes de las redes de recolección de los sectores Villas Prados de Peñuelas y Villa Potrerillos. b) Informar las medidas de mitigación a implementar mientras se logra la solución estructural definitiva para los sectores Villa Prados de Peñuelas, Villa Potrerillos y Barrio Industrial. c) Eliminar los “saltos interiores” de las cámaras de inspección del colector de calle Maihue. NO es aceptable la solución de instalar válvulas anti-retorno. d) Realizar campaña de medición de caudales nocturnos por cada colector de las cuencas aportantes; realizar campaña de medición de caudales nocturnos en la cabecera del colector de calle Maihue. e) Realizar un Plan de Mantenimiento Preventivo semanal de la red de recolección y cámaras de rejillas del sector Barrio Industrial.**

Indica, que contra dicho oficio se interpuso recurso de reposición, el cual fue acogido parcialmente mediante Oficio N°3333, de 23 de octubre de 2024. Sin embargo, mantiene firme instrucciones que no se ajustan a la normativa vigente y generan perjuicio a Aguas del Valle S.A.

Explica, que producto de la descarga de residuos industriales líquidos fuera de los parámetros convenidos por los establecimientos industriales ubicados en el Barrio Industrial de Coquimbo, los residentes del sector Los Prados de Peñuelas interpusieron recurso de protección ante la Iltrma. Corte



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SSWQXUEWXEB

de Apelaciones de La Serena, la cual se tramitó bajo el Rol 528-2023. Dicha acción fue interpuesta sólo contra la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y, en definitiva, fue acogida, ordenando a Aguas del Valle S.A. y la Superintendencia, la elaboración de un plan de medidas y acciones concretas a realizar, las que debían ser puestas en conocimiento de la Superintendencia y SEREMI de Salud de Coquimbo, para su debido control. Dicho plan consistía en la realización de inspecciones diarias a las descargas de residuos industriales líquidos de 9 establecimientos pesqueros, un monitoreo compuesto de esos establecimientos respecto de distintos parámetros cuyos resultados fueron compartidos a la Superintendencia y SEREMI de Salud. También, se gestionó un plan de mantenimiento preventivo de redes. Es en ese contexto en el cual se enmarcan las instrucciones dictadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y que se reclaman en autos.

Menciona, que mediante los oficios reclamados, la Superintendencia ordena a Aguas del Valle S.A. a ejecutar obras definitivas que independicen las descargas de residuos industriales líquidos de la red de recolección de los sectores Villa Prados de Peñuelas y Villa Potrerillos.

En primer lugar, alega la ilegalidad de la resolución que ordena independizar descargas, alterando la distribución de roles, inmiscuyéndose en la gestión directa de la fiscalización de residuos industriales líquidos, y alterando la lógica de la eficiencia que rige la prestación de servicios públicos sanitarios. Señala que el Decreto N°609 de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, establece la norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos a sistemas de alcantarillados. Transcribe el artículo 4.4 del decreto en comento, y menciona que para el caso de recepción de los residuos industriales líquidos por parte de la empresa sanitaria, aquella puede celebrar convenios con los respectivos establecimientos industriales, como ocurre en el caso de autos, en que existen convenios celebrados con 3 establecimientos industriales, de los 9 establecimientos pesqueros. La Superintendencia al instruir ejecutar obras que independicen la descarga de los residuos industriales líquidos en Barrio Industrial, excede el rol que le cabe en el asunto de autos, esto es, el rol de supervigilancia, inmiscuyéndose en las labores propias de la explotación de los servicios sanitarios.



En segundo lugar, advierte la omisión en el rol de control de supervigilancia de la Superintendencia sobre los establecimientos industriales, infringiendo con ello los artículos 11 inciso 2° y 19 de la Ley N°18.902, pues contando con facultades para instruir directamente a dichos establecimientos y teniendo los medios necesarios para ello, a partir de la información reportada por Aguas del Valle S.A., busca instruir a la entidad encargada de la fiscalización de residuos industriales líquidos en vez de dirigirse al origen causal del problema, respecto de los establecimientos incumplidores.

En tercer lugar, afirma que la instrucción impartida va contra el fallo dictado por la ltma. Corte de Apelaciones de La Serena en causa Rol 528-2023, pues dicha sentencia expresa en su considerando noveno que Aguas del Valle S.A. y la Superintendencia de Servicios Sanitarios deberán coordinarse entre sí y planificar de manera conjunta las acciones que llevarán a cabo para evitar la reiteración y prolongación en el tiempo del fenómeno contaminante que se expuso en el recurso de protección, de modo de lograr verificar con precisión las circunstancias y causas que han ocasionado la pestilencia denuncia, y, como resultado de ello, adoptar las medidas adecuadas para mitigar y en lo posible, eliminar su producción. La Superintendencia no ha determinado el origen del problema, y no se han discutido las medidas para mitigar el problema, ya que eliminarlo se torna casi imposible.

Se refiere a las medidas adoptadas por Aguas del Valle S.A., y asevera que ha cumplido a cabalidad con el plan de fiscalización comprometido, y por un plazo superior incluso a los tres meses originalmente propuestos, realizando inspecciones diarias a los 9 establecimientos industriales del rubro pesquero que operan en el barrio industrial; al detectar situaciones de incumplimiento, ha adoptado la medida de suspensión de la prestación del servicio; ha ejecutado un plan de mantenimiento preventivo de redes cuya implementación actualmente equivale a más de un 200% de lo comprometido.

Hace presente la inviabilidad técnica de la ejecución de obras de infraestructura definitiva para el sector de Barrio Industrial de Coquimbo como supuesta forma de dar una solución efectiva a la problemática de malos olores que se generan en el sector, precisando que las instrucciones



impartidas, y que en autos se reclaman, podrían traducirse en una obligación de ejecutar obras de infraestructura sanitaria que no sean reconocidas en las tarifas. Al no ser Aguas del Valle la causante de los malos olores en el ambiente, la instrucción se torna en abusiva, al imponer la totalidad de la responsabilidad en su mitigación y solución a una empresa que cumple un rol específico de fiscalización, inserto en una institucionalidad más compleja compuesta por otros actores con competencias de mayor efectividad. Incluso si las obras instruidas por la Superintendencia fueran técnicamente aconsejables y jurídicamente procedentes, su ejecución implica costos estimados entre 20 y 40 mil millones de pesos, generando un shock tarifario que recaería sobre los mismos usuarios residenciales afectados, lo que resulta especialmente contradictorio, considerando que los problemas de olores tienen su origen en los incumplimientos normativos de los establecimientos industriales, quienes deberían asumir la responsabilidad y los esfuerzos necesarios para solucionar dichos problemas.

Concluye, señalando que Aguas del Valle S.A. ha adoptado una serie de medidas tendientes a mejorar la fiscalización existente en el lugar, cumpliendo así con las facultades normativas que le han sido entregadas para la fiscalización de la descarga de residuos industriales líquidos. Ante ello, procede que la Superintendencia de Servicios Sanitarios ejerza las facultades otorgadas por ley, para instruir, multar y apercibir a los establecimientos industriales al cumplimiento de la normativa vigente en su descarga de residuos.

Por lo expuesto, pide se deje sin efecto la instrucción dada en el Oficio N°2776, de 30 de agosto de 2024, y refrendada en el Oficio N°3333, de 23 de octubre de 2024, en orden a instruir a Aguas del Valle S.A. la ejecución de obras de mejoramiento de red de recolección del sector Barrio Industrial de Coquimbo que impliquen una solución de infraestructura definitiva para ese sector.

2°.- Que, evacuando traslado, por la **Superintendencia de Servicios Sanitarios**, comparece la abogada María Alicia Von Pottstock Molina, quien indica que el recurso deducido supone la concurrencia de ciertos presupuestos legales que deben ocurrir conjuntamente, tal como lo establece el artículo 32 de la Ley N°18.902: la existencia de una infracción de ley, y que ello cause un perjuicio al recurrente.



La recurrente expone que la instrucción recurrida es contraria a los artículos 19 y 11 inciso 2° de la Ley N°18.902, Orgánica de la Superintendencia de Servicios Sanitarios; Al artículo 4.4. del D.S. MOP N°609 de 2018, norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos a sistemas de alcantarillado; A los artículos 45 y 55 del D.F.L. MOP N°382/88 Ley General de Servicios Sanitarios; Al artículo 2 inciso 2° de la Ley N°18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado y a la sentencia definitiva dictada por la Iltrma. Corte de Apelaciones de La Serena, en autos sobre Recurso de Protección, Rol 528-2023.

Sin embargo, la reclamada, afirma que las instrucciones impugnadas y contenidas en los Oficios SISS N°2776 y N°3333 de 2024, han sido dictadas conforme el marco legal respectivo y cumpliendo la atribución que echa en falta la recurrente, de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del público y resguardar los derechos de los usuarios de servicios sanitarios de recolección de aguas servidas, los que se encuentran afectados en su calidad, lo que se traduce en una serie de externalidades negativas como de olores nauseabundos, siendo que las instrucciones recurridas buscan asegurar que el prestador sanitario cumpla con la calidad del servicio de recolección de aguas servidas que le impone su concesión, mediante la ejecución de infraestructura, la adopción de medidas de mitigación y otras acciones destinadas a eliminar la agitación y turbulencia del flujo de aguas servidas.

La potestad fiscalizadora y sancionadora respecto de la descarga de esas aguas residuales le corresponde a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, afirma la autoridad recurrida.

Por lo expuesto, pide tener por evacuado informe y, en definitiva, rechazar el recurso de reclamación por ilegalidad interpuesto en contra de los Oficios SISS N°2776 y N°3333, declarando la legalidad de los mismos, con costas.

3°.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N° 18.902 que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, se dispone que las resoluciones u omisiones de la Superintendencia que no se ajusten a la ley, reglamentos o normas que le compete aplicar y que causen perjuicio, serán reclamables ante la Corte de Apelaciones de Santiago.



Pues bien, no obstante que la ley no indica pormenorizadamente causales precisas y determinadas para formular la reclamación, lo cierto es que tratándose la Superintendencia de Servicios Sanitarios de un servicio que forma parte de la administración del Estado, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Obras Públicas, cuyo domicilio será la ciudad de Santiago, resulta evidente que el reclamo del artículo 32 es de naturaleza contenciosa administrativa y que su finalidad es que la Corte de Apelaciones de Santiago determine si la Administración se ajustó o no a la legalidad vigente al expedir las decisiones que se cuestionan en el presente reclamo.

4°.- Que, las ilegalidades que la reclamante censura, se atribuyen a las decisiones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios contenidas en el oficio SISS N° 2776, de 30 de agosto de 2024, refrendada por el oficio SISS N° 3333, de 23 de octubre de 2024, notificadas a la reclamante mediante carta certificada.

En la primera, se mantiene firme la instrucción impartida a Aguas del Valle S.A mediante oficio N°1847 de 13 de junio del 2024, en el que se ordena:

a) Ejecutar una solución de infraestructura definitiva para el sector Barrio Industrial que independice las descargas de Riles de las redes de recolección de los sectores Villas Prados de Peñuelas y Villa Potrerillos.

b) Informar las medidas de mitigación a implementar mientras se logra la solución estructural definitiva para los sectores Villa Prados de Peñuelas, Villa Potrerillos y Barrio Industrial.

c) Eliminar los “saltos interiores” de las cámaras de inspección del colector de calle Maihue. no es aceptable la solución de instalar válvulas anti-retorno.

d) Realizar campaña de medición de caudales nocturnos por cada colector de las cuencas aportantes; realizar campaña de medición de caudales nocturnos en la cabecera del colector de calle Maihue.

e) Realizar un Plan de Mantenimiento Preventivo semanal de la red de recolección y cámaras de rejillas del sector Barrio Industrial.

Contra dicho oficio se interpuso recurso de reposición, el cual fue acogido parcialmente mediante Oficio N°3333 de fecha 23 de octubre del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SSWQXUEWXEB

2024. Sin embargo, mantuvo a firme instrucciones que la recurrente estima que no se ajustan a la normativa vigente y le generan perjuicio, que son:

a) Ejecutar una solución de infraestructura definitiva para el sector Barrio Industrial que independice las descargas de Riles de las redes de recolección de los sectores Villa Prados de Peñuelas y Villa Potrerillos.

b) Informar las medidas de mitigación a implementar mientras se logra la solución estructural definitiva para los sectores Villa Prados de Peñuelas, Potrerillos y Barrio Industrial y,

c) Eliminar los “saltos interiores” de las cámaras de inspección del colector de calle Maihue. No es aceptable la solución de instalar válvulas anti-retorno.

5°.- Que, la recurrente ha señalado que lo anterior es contrario a diversa normativa, citando los artículos 19 y 11 inciso 2° de la Ley N°18.902, Orgánica de la Superintendencia de Servicios Sanitarios; el artículo 4.4. del D.S. MOP N°609 de 2018, norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos a sistemas de alcantarillado; los artículos 45 y 55 del D.F.L. MOP N°382/88 Ley General de Servicios Sanitarios; el artículo 2 inciso 2° de la Ley N°18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado y a la sentencia definitiva dictada por la Iltrma. Corte de Apelaciones de La Serena, en autos sobre Recurso de Protección, Rol 528-2023.

6°.- Que, en cuanto a la infracción a los artículos 19 y 11 inciso 2° de la Ley N°18.902, lo cierto es que las instrucciones impugnadas y contenidas en los Oficios SISS N°2776 y N°3333 de 2024, han sido dictadas conforme el marco legal respectivo y cumpliendo la atribución que echa en falta la recurrente, precisamente de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del público y resguardar los derechos de los usuarios de servicios sanitarios de recolección de aguas servidas, los que se encuentran afectados en su calidad y que se traduce en una serie de externalidades negativas como de olores nauseabundos, siendo que mediante la Resolución SISS N°1352, de 29 de junio de 2023, se instruyó la apertura de una investigación administrativa para esclarecer los hechos relacionados con descargas de residuos industriales líquidos al sistema de recolección de aguas servidas a cargo de Aguas del Valle S.A., en el mes de julio de 2023 levantándose el respectivo informe de fiscalización, iniciándose por la



Superintendencia del ramo los respectivos procesos de sanción por descargar residuos líquidos al sistema de alcantarillado público por parte de la concesionaria Aguas del Valle S.A. mediante los expedientes N°5389, N°5392 y N°5393, en los cuales se sancionó con multas de 15 y 24 Unidades Tributarias Anuales a los establecimientos industriales infractores, y también mediante el expediente N°5417 a Aguas del Valle S.A., aplicándosele una multa de 40 Unidades Tributarias Anuales por haber incurrido en incumplimiento del deber de garantizar la calidad del servicio de recolección de aguas servidas.

7°.- Que, en relación a la infracción al artículo 4.4 del Decreto N°609 de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, no es efectivo que la Superintendencia se exceda de sus facultades ni se ha inmiscuido en la operación y explotación del servicio, toda vez que las instrucciones recurridas buscaban asegurar que el prestador sanitario cumpla con la calidad del servicio de recolección de aguas servidas que le impone su concesión, ello mediante la ejecución de infraestructura, la adopción de medidas de mitigación y otras acciones destinadas a eliminar la agitación y turbulencia del flujo de aguas servidas, a fin de dar una solución a la problemática que afecta a la población del sector Villa Prados de Peñuelas, Villa Potrerillos y Barrio Industrial, todos de la comuna de Coquimbo.

8°.- Que, en cuanto a una eventual infracción al artículo 45 del Decreto con Fuerza de Ley N°382/88, Ley General de Servicios Sanitarios, expresa que la Ley N°20.417, que modificó el artículo 2 de la Ley N°18.902, disposición que confiere a la Superintendencia la potestad para controlar los residuos líquidos que se encuentren vinculados a las prestaciones o servicios de las empresas sanitarias, por lo que el hecho fiscalizado, consistente en la descarga de esas aguas residuales, claramente le corresponde a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, desde el punto donde se efectúa la descarga de residuos industriales líquidos al alcantarillado hasta el punto de medición que informa el concesionario. Y, si del hecho fiscalizado se advierte incumplimiento o disconformidad, hará valer sus atribuciones de regulación, fiscalización y sanción previstas en la ley sectorial y dará lugar también para que otros organismos, como la Superintendencia del Medio Ambiente y también la Autoridad de Salud, persigan la infracción respectiva.



9°.- Que, en cuanto a la infracción al artículo 2° inciso 2° de la Ley N°18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, no se advierte cómo la Superintendencia podría vulnerar la norma legal de la Ley 18.575, por cuanto, como ya se advirtió, es ese organismo, entre otros, al que le asiste el deber de fiscalizar y regular al concesionario sanitario, instruyendo la acciones que estime más conveniente para que se cumpla con la garantía legal que dispone el artículo 35 de la Ley General de Servicios Sanitarios.

Y, por último, en cuanto a la infracción a la sentencia dictada por la Iltna. Corte de Apelaciones de La Serena, en autos sobre recurso de protección Rol 528-2023, en lo que interesa, el motivo noveno, precisa que Aguas del Valle S.A y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, deberán coordinarse entre sí y planificar de manera conjunta las acciones que llevarán a cabo para evitar la reiteración y prolongación en el tiempo del fenómeno contaminante que se expuso en el recurso de protección, de modo de lograr verificar con precisión las circunstancias y causas que han ocasionado la pestilencia denuncia, y, como resultado de ello, adoptar las medidas adecuadas para mitigar y en lo posible, eliminar su producción.

Inmediatamente, en la parte resolutive, la Iltna. Corte de Apelaciones de La Serena ordena dar cumplimiento a lo dispuesto en el considerando 9°, que establece que se debe determinar la causa y origen de este problema para poder adoptar una solución que la mitigue o, en lo posible, la elimine.

10°.- Que, al respecto, conforme la revisión de los antecedentes, se aprecia que la producción industrial en la Región de Coquimbo, y en específico en el denominado Barrio Industrial de esa misma comuna, presenta un fuerte componente basado en la elaboración y procesamiento de productos del mar, debido a los recursos que se extraen desde el medio marino en la región, existiendo nueve establecimientos que procesan productos del mar, entre otros, camarón, jibia y langostino, que se ubican en el denominado Barrio Industrial de Coquimbo, y los residuos líquidos de estos procesos industriales se disponen en la red de alcantarillado de la empresa sanitaria y recurrente de autos.

Se consigna de los antecedentes, que desde hace varios años los vecinos de la Villa Prados de Peñuelas han manifestado percibir olores molestos provenientes de la red de alcantarillado, los cuales se perciben al interior de las viviendas y en el medio ambiente, por lo que dichos vecinos



organizados acudieron a los Tribunales de la República para el restablecimiento de sus derechos conculcados, a través de un recurso de protección, lo que derivó, consecuencialmente, en que la I. Corte de Apelaciones de La Serena acogiera el aludido recurso y resolviera, entre otros, que Aguas del Valle debía diseñar un Plan de Mitigación, en conjunto con la SISS, destinado a eliminar la generación de olores molestos que afectan al sector.

Para atender lo resuelto, se procedió precisamente a la dictación de la Resolución SISS N°1352 del 29 de junio de 2023, que designa fiscalizadores especiales a los funcionarios de la División de Fiscalización de la SISS y les encomienda determinar las causas del problema, la responsabilidad y participación de los establecimientos industriales y finalmente establecer las medidas para solucionar, entre otros, el problema descrito, así como las acciones para evitar la ocurrencia nuevamente de estos eventos.

11°.- Que, luego de una investigación, se estableció que la causa fue la deficiencia del sistema de recolección de aguas servidas provenientes de la recurrente y mediante expediente N° 5417, se le aplicó una multa de 40 Unidades Tributarias Anuales a Aguas del Valle por incumplimiento del deber de garantizar la calidad del servicio de recolección de aguas servidas.

Como se aprecia, precisamente la autoridad aparece cumpliendo cabalmente con la orden emanada de ese fallo y, en todo caso, cualquier incumplimiento de ese fallo debió reclamarse en la sede respectiva.

12°.- Que, la reclamada Superintendencia de Servicios Sanitarios es un órgano estatal, especialmente encargado de velar por el cumplimiento de la normativa legal pertinente y que cuenta con los medios financieros, técnicos y administrativos necesarios para cumplir a cabalidad estas finalidades.

En la presente acción de reclamación sólo es procedente revisar la legalidad de los actos de la autoridad técnica, sin que sea esta la vía para modificar los aspectos técnicos definidos, por ser tales criterios de su exclusiva competencia. En el caso de la especie, el reclamante se limita a cuestionar su proceder, sin demostrar incumplimiento legal ni reglamentario en apoyo de sus afirmaciones, exponiendo únicamente un distinto punto de vista respecto del proceder del servicio público censurado.



13°.- Que, conforme se viene razonado, no se observa ilegalidad en el actuar de la reclamada, razón por la cual la acción intentada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 32 y siguientes de la Ley N°18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, se decide que:

Se **RECHAZA**, sin costas, el reclamo de ilegalidad deducido en representación de Aguas del Valle S.A., en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSS).

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera M.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° Contencioso-Administrativo-752-2024.

Pronunciada por la **Octava Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada, por el Ministro (s) señor Sergio Córdova Alarcón y la Abogada Integrante señora Magaly Correa Farías. No firma el Ministro señor Rivera, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SSWQXUEWXEB

Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Suplente Sergio Guillermo Cordova A. y Abogada Integrante Magaly Carolina Correa F. Santiago, veintiuno de abril de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintiuno de abril de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SSWQXUEWXEB